

Salamanca, Guanajuato, a 01 primero de octubre de 2021 dos mil veintiuno, encontrándose debidamente integrado el expediente **JAM-72/2021**, promovido por Epifania XXXXXXXXX, por su propio derecho, en los siguientes términos;

RESULTANDO

PRIMERO. Promoción de la demanda. Por escrito presentado ante este Juzgado Administrativo Municipal el 11 once de agosto de 2021 dos mil veintiuno, suscrito por quien se indica en el proemio de la presente resolución, impugnando los siguientes actos administrativos:

- I. La boleta de infracción con número de folio XXXXXX, la cual le fue notificada el 05 cinco de agosto de 2021 dos mil veintiuno.

- II. La calificación de la boleta de infracción, la cual se acredita en la boleta de infracción original del 06 seis de agosto de 2021 dos mil veintiuno referida en el punto anterior, en la que se determinó un crédito fiscal por la cantidad de \$448.00 (cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 en Moneda Nacional).

Además, solicitó a) La declaración de nulidad de dicho acto, b) El reconocimiento de un derecho para que se deje sin efectos la boleta de infracción y se devuelva la placa de circulación que se retuvo en garantía con motivo de un acto administrativo que a su juicio resulta ilegal, y la abstención a la inscripción de cualquier registro negativo, eliminación o cancelación c) La condena a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de los derechos violentados.

SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de fecha de 16 dieciséis de agosto de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se emplazó a las autoridades demandadas para que dieran contestación de la demanda entablada en su contra.

Se tuvo por admitidas las pruebas documentales ofrecidas y exhibidas en su escrito inicial de demanda, así como la presuncional legal y humana en todo lo que le favorezca, se le tuvo por señalando autorizados legales y domicilio para recibir notificaciones, además manifestó que no consiente la publicación de sus datos personales.

Se otorgo la suspensión con efectos restitutorios, toda vez que no constituye un acto consumado, sino de tracto sucesivo, esto con fundamento en los artículos 268, 269 y 275 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERO. Contestación de la demanda. Por auto de fecha 21 veintiuno de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, a las autoridades demandadas por contestando en tiempo y forma la demanda entablada en su contra. Señalando domicilio procesal y autorizados legales para oír y recibir toda clase de notificaciones. Así como también se le tuvo por admitidas las pruebas que aluden en su escrito de contestación.

Finalmente, se señaló fecha y hora para el desahogo de audiencia de alegatos.

CUARTO. Audiencia final del proceso. Legalmente citadas las partes, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos de 30 treinta de octubre de 2020 dos mil veinte, únicamente la parte actora los presentó por escrito.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Este juzgado Administrativo Municipal con sede en Salamanca, Guanajuato, es competente para conocer y resolver el

presente proceso, de conformidad con los artículos 1, fracción II; 304-A, 304-B y 304-C del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato; así como lo previsto por los artículos 241, 243 segundo párrafo; 244 y 246, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Certeza del acto impugnado. La existencia se tiene por acreditado con la original de la boleta de infracción con número de folio XXXXX –foja 10-, emitida el 05 cinco de agosto de 2021 dos mil veintiuno misma que se solicitó con fundamento en el artículo 50 del Código multicitado. Admniculada con la confesión realizada por la autoridad encausada al momento de contestar la demanda en cuanto expreso que era cierto la elaboración de la infracción impugnada.

Esta valoración se fundamenta en los artículos 48 fracción I, 57, 117,118, y 124 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En cuanto a la calificación se tiene por acreditada dentro de la de la boleta de infracción original, emitida por la autoridad demandada.

TERCERO. Las causales de improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y, por tanto, de estudio oficioso y preferente.

En esa tesitura se analizará la que hacen valer la autoridad demanda, quien en síntesis expresan lo siguiente:

“...opongo la excepción de falta de agravio personal y directo en la esfera jurídica del demandante...”

En cuanto a la falta de interés jurídico del actor lo expuesto por las autoridades demandada y el tercero en el proceso resulta infundado atento a las siguientes consideraciones.

Del folio de infracción XXXXXX se desprende que el agente vial en el rubro del conductor asentó de manera literal a “A quien corresponda” (sic).

Ante tal indeterminación del sujeto al cual se dirige el acto impugnado, la autoridad no plasma el actor directamente, sin embargo, deja la posibilidad de que cualquier persona se sintiera afectado en su esfera jurídica con el acto de autoridad y, por lo tanto, acudir ante este órgano de control jurisdiccional a demandar su nulidad.

Entonces, si **Epifania XXXXXXXX**, acude a promover el presente proceso como afectado por la imposición de la boleta de infracción a, teniendo en su poder el documento original en que obra ella multa, su interés jurídico lo acredita con la documental privada consistente en la copia simple de la tarjeta de circulación visible en -foja 11-, al estar dirigida a nombre de la parte actora, y con la cual se aparejan los datos de la misma con los señalados en la multa de tránsito pues se desprende que el justiciable, en fecha 05 cinco de agosto de 2021 dos mil veintiuno, se le interpuso una multa por la cantidad de \$448.00 (cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 en Moneda Nacional), crédito fiscal emanado del folio de infracción refutado.

Esta valoración se fundamenta en los artículos 117, 121 y 131 del *Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato*.

Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis aislada, que se aplica por analogía y que fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y que a la letra establece:

<<INTERES JURIDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia.>>

Por otro lado, en cuanto al señalamiento que hace la autoridad respecto de la legalidad de su actuación y su percepción acerca de que por ello este proceso es improcedente, debe señalarse que la materia de controversia en este caso es precisamente la definición de la legalidad del acto combatido, razón por la que no puede traducirse en una causa de improcedencia o de sobreseimiento establecidas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues sus consideraciones se refieren a la legalidad del acto impugnado.

Dicho de otro modo, las alegaciones de la autoridad se refieren al estudio de la cuestión de fondo del asunto, razón por la que sus planteamientos no constituyen una de las causas antes señaladas y, por ende, es preciso desestimar su estudio en este apartado.

En cuanto a la objeción que realiza el tercero y la autoridad demandada sobre el acto impugnado, con fundamento en el artículo 86 del Código multicitado, se dice que no ha lugar toda vez que el actor acreditó su derecho que reclama, al presentar las pruebas idóneas para ello.

Por lo anteriormente expuesto y al no actualizarse alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 261, en relación con el 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia

Administrativa para el Estado y los Municipios del Guanajuato, **NO SE SOBRESSEE EL PRESENTE PROCESO ADMINISTRATIVO.**

CUARTO. Se precisa a las partes que no se transcribirán íntegramente el concepto de impugnación expuesto por el accionante, ni los argumentos esgrimidos por la autoridad demandada. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a. /J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXXI, de mayo de 2010 dos mil diez, consultable a página 830, que es del tenor literal siguiente:

«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer».

QUINTO. Antes de entrar al fondo del asunto, si ello resulta procedente, es importante en principio, observar lo dispuesto por el artículo 302, último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en el que se establece que debe de analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público, si en el caso que nos ocupa existe incompetencia de la autoridad para dictar el acto administrativo combatido, determinación que se encuentra fortalecida por analogía

en la Jurisprudencia 2ª/J.218/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de diciembre de 2007 y que señala el rubro siguiente:

“Competencia. Su estudio oficioso respecto de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, debe ser analizada por las salas del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa. “

En efecto esta juzgadora considera que la boleta de infracción **XXXXX** deviene ilegal en atención a que fue emitida por una autoridad incompetente para su elaboración, atento a las siguientes consideraciones de derecho:

El artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone como requisito esencial y obligación a todas las autoridades citar debidamente su legal competencia a fin de generar actos de molestia, esto señalando, su marco jurídico de actuación que los legitime para ello, para mayor comprensión se transcribe el texto constitucional aludido:

<<Artículo. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.>>

En ese orden de ideas, todo acto de autoridad que provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo.

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 137, fracción I, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que los actos administrativos

deben contener el elemento de validez, entre otros, el de **ser expedido por autoridad competente.**

A fin de que Mireya XXXXXX cuyo nombramiento de agente vial lo tiene con efectos de a partir del día lunes 17 diecisiete de junio de 2019 dos mil diecinueve al 27 veintisiete de septiembre del mismo año -foja 31- y no de la fecha en la que se emitió el acto, pues, en ese momento no tenía competencia para emitir una boleta de infracción como agente vial. Dentro del acto referido se puede observar que se realizó el 05 cinco de agosto de 2021 dos mil veintiuno. Dicha legitimidad debe encontrarse prevista dentro del Reglamento Vialidad para el municipio de Salamanca, Guanajuato que regule las atribuciones, facultades derechos y obligaciones de acuerdo al grado que ostente dentro de la institución.

Es de resaltar, que la premisa de legalidad estriba en que la autoridad municipal únicamente puede hacer lo que la ley le concede y el gobernado todo lo que esta no le prohíbe, en el caso que nos ocupa se advierte que la emisión de la boleta de infracción XXXXXX del 05 cinco de agosto de 2021 dos mil veintiuno, fue elaborada ***por Mireya XXXXXXXX quien en ese momento no contaba con el nombramiento de, agente vial, pues como se puede apreciar en su nombramiento, ya se encontraba por terminado, así como tampoco fundamenta ni motiva su competencia con el cual contaba en ese momento, al no tratarse de un agente vial para emitir dicho acto,*** y para tales efectos aportó copia certificada de su nombramiento oficial –foja 31- del cual se desprende el cargo/rango que ostenta dentro de la institución, es como agente vial a partir del 17 diecisiete de junio del 2019 dos mil diecinueve con terminación de dicho cargo el 22 veintidós de septiembre del mismo año.

Así las cosas, al ser un elemento de validez previsto en la fracción I del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, aunado a lo señalado en la fracción VI de dicho artículo relativo a la debida fundamentación

y motivación de los actos administrativos, además de que la debida fundamentación de la competencia es una garantía constitucional consignada en el artículo 16 de la Carta Magna y requisito mínimo del acto de autoridad que consiste en señalar el fundamento legal que da atribuciones para emitir su acto, citando de manera correcta el precepto legal, fracción, inciso, subinciso o transcribiendo el apartado correspondiente que legitime su actuación.

Ahora bien, el artículo 143 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, consigna lo siguiente:

Artículo 143. La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos de validez establecidos en el artículo 137 del presente Código, producirá la nulidad del acto administrativo.

El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo, sea en sede administrativa o jurisdiccional, será inválido, no se presumirá legítimo ni ejecutable, ni podrá subsanarse, sin perjuicio de que pueda expedirse otro acto. Declarada la nulidad producirá efectos retroactivos y los particulares no tendrán obligación de cumplir el acto.

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público que lo hubiere emitido u ordenado y, en su caso, a la indemnización para el afectado, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Por lo tanto, un acto administrativo que no cumple con alguno de los elementos del citado artículo 137, como en la especie resulta al ser emitido por autoridad que carecía de competencia para la emisión de su acto, produce la nulidad total del mismo.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 143, 300 fracción II y 302 fracción I del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo procedente es decretar la **NULIDAD TOTAL** del acto impugnado consistente en boleta de infracción XXXX, elaborada por Mireya XXXXX.

Sirve de apoyo al caso concreto, la siguiente Tesis Aislada con registro 188678, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Fuente Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece:

<<AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO. La garantía que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas características encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se encuentra íntimamente adminiculado a la garantía de fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de

aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido.>>

Asimismo, es procedente decretar la nulidad total de la calificación de boleta anulado, esto por ser producto de un acto viciado de origen y, por ende, no puede subsistir sin aquella que le dio origen.

Esta determinación se sustenta en el artículo 300 fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 121-126 sexta parte; pagina 280, Séptima Época, con registro número 252103, que esta establece:

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.” -----

Por consiguiente, la declaración de nulidad total del acto impugnado, produce como consecuencia que al actor ya no se le aplique ninguna sanción administrativa por los hechos indicados en el folio de infracción sobre el cual recayó la nulidad lisa y llana.

En virtud del estudio oficioso realizado por esta juzgadora referente a la competencia de la autoridad emisora del acto, es innecesario que se analicen los conceptos de impugnación que se hicieron valer en el escrito inicial de demanda, pues a nada práctico conduciría, pues el folio de infracción **XXXXX** por las causas expuestas ha quedado insubsistente

SEXTO. Dentro del escrito inicial de demanda el ahora actor solicito como reconocimiento de derecho lo siguiente:

- a)** el reconocimiento de derecho para que le sea devuelta la placa de circulación retenida en garantía, por concepto de una multa de tránsito.
- b)** el derecho para que la autoridad se abstenga de hacer cualquier tipo de registro de carácter negativo o perjudicial, o bien si ya se realizó se proceda a su cancelación dentro del libro de sanciones administrativas del municipio de Salamanca, Guanajuato, así como la condena a la autoridad encausada para adoptar las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de los derechos violentados.

En cuanto al inciso a) el actor acreditó su interés jurídico, por lo que se le concedió la suspensión para efecto de que se devolviera la placa de circulación retenida. Toda vez que el presenta acto ha causado NULIDAD TOTAL y por lo tanto queda sin efectos. Así mismo el documento devuelto queda de la misma manera y se ordena la abstención de realizar cualquier cobro.

Por lo que respecta a la no inscripción y/o cancelación de los antecedentes administrativos, **ha lugar al reconocimiento** del derecho, en atención a los siguientes argumentos:

Toda actuación policial se asienta en documentos oficiales para su debido registro en las plataformas destinado para ellos, tal y como se desprende del artículo 40, fracción IX de la Ley General del Sistema de Seguridad Publica y lo correlativo al numeral 85 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, que a la letra establecen:

De la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

<< **Artículo 40.-** Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables.

De la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato.

Colaboración en materia de registro de antecedentes de +tránsito

Artículo 85. Con la finalidad de contar con información oportuna y suficiente para prevenir accidentes de tránsito, así como para detectar a los infractores reincidentes, la Policía Estatal de Caminos, y los municipios, se apoyarán en el registro estatal de antecedentes de tránsito...>>

Por ende, una vez que ha quedado anulada la boleta de infracción y el total de su contenido, SE RECONOCE EL DERECHO DE LA PARTE ACTORA, a que la autoridad demandada se abstenga de realizar o colaborar en la inscripción de antecedentes de tránsito y en el supuesto de haberse inscrito la sanción materia del presente juicio, PROCEDA A SU CANCELACION

TODA VEZ QUE HA QUEDADO ANULADA CON MOTIVO DE LA PRESENTE SENTENCIA.

En esa tesitura y derivado de los argumentos esgrimidos por esta juzgadora, **se condena a la autoridad demandada (agente vial)** a realizar las gestiones necesarias a fin de que realice al actor, la cancelación o eliminación de cualquier anotación de carácter negativo.o anterior con la finalidad de no imponer cargas al actor para el cumplimiento de la presente sentencia.

Debiendo adoptar la autoridad demanda todas las medidas que sean necesarias para el pleno restablecimiento del derecho reconocido, pudiendo auxiliarse de otras autoridades para el cabal cumplimiento de esta sentencia.

En base a lo antes expuesto, la autoridad deberá informar sobre el cumplimiento otorgado al presente considerando, *en un término de cinco días hábiles* contados a partir de aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Este Juzgado Administrativo Municipal resulto competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, atento a lo dispuesto por el considerando primero de esta sentencia.

SEGUNDO. Se declara la **NULIDAD TOTAL** de la boleta de infracción **XXXXX**, en los términos de lo manifestado en los **CONSIDERANDO QUINTO**.

TERCERO. Ha lugar al **RECONOCIMIENTO DEL DERECHO** de la parte actora, Y **A LA CONDENA** de las pretensiones declaradas procedentes, en los términos manifestados en el **CONSIDERANDO SEXTO**.

NOTIFÍQUESE. En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y dese de baja del Libro de Registro de este órgano de control de legalidad.

Así lo resolvió y firma la Licenciada **Estephania Núñez Diosdado**, encargada de despacho del Juzgado Administrativo Municipal de Salamanca, Guanajuato, quien actúa asistido en forma legal con Secretaria de Estudio y Cuenta, Licenciada **Lesli Hayde Leticia Valadez Dávalos**, quien da fe.